

mo y por diez años en los de ramo diverso, frac. 4ª. del art. 1,028, y última del 1,030. Considerando por último: que los defensores Lic. D. Manuel Prieto y D. Francisco T. Gordillo, nombrado el primero por D. Francisco López Páramo y el segundo por D. Antonio Espinosa, no se han presentado ante esta Sala á patrocinar á sus respectivos reos, como cumplia á su oficio.

Se decreta de conformidad con lo pedido por el Sr. Procurador General, que es de confirmarse y se confirma en todas sus partes la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Morelia en 28 de Abril próximo pasado, que condena á los procesados D. Antonio Espinosa y D. Francisco López Páramo, á la destitucion de sus empleos de administrador é interventor de la oficina principal de Correos de la Ciudad de Morelia, á inhabilitacion perpetua para otro empleo ó encargo del mismo ramo, y por diez años para los de ramo diverso, dando por extinguida la pena de arresto menor de que tambien son dignos, con el tiempo que sufrieron de prision á consecuencia del auto motivado de ella y que fué pronunciado en 25 de Setiembre de 1872.

Se hace una seria advertencia á los expresados Lics. Prieto y Gordillo, para que en lo de adelante sean mas exactos en el cumplimiento de su deber.

Devuélvanse las actuaciones al Tribunal de Circuito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron la primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazón.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Aza.*—*S. Guzman.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Octubre 3 de 1873.—*Alejo Gomez Eguarte*, oficial mayor.

COMPETENCIA.

Promovida por el Juzgado 2º de Distrito de esta Capital al 3º de lo civil de la misma, para conocer del incidente que ha ocurrido en los autos seguidos por D. Julio Robreau contra D. Santiago Richard, sobre pesos.

PEDIMENTO DEL C. FISCAL.

El Fiscal dice: que el año de 1866, D. Julio Robreau, siguió ante el Juzgado cuarto de instruccion del ramo civil, encargado de los negocios de Hacienda, un juicio contra D. Santiago Richard, demandándole el pago de tres mil pesos y sus réditos correspondientes. La obligacion en que constaba el débito ó sea la obligacion personal del deudor, está extendida en una hoja de papel del sello tercero de act. acciones, de á cuatro reales. Bajo esta circunstancia, los autos fueron corriendo sus diversos trámites en la vía ejecutiva, hasta el punto de haberse pronunciado en diversas ocasiones autos de exequendo; ya para la traba de la ejecucion primera, ya para su mejoramiento despues. Por fin, en 9 de Enero próximo pasado, se presentó D. Julio Robreau, por medio de un apoderado ante el Juez segundo de lo civil de esta Capital y á cuyo conocimiento habia llegado este negocio, promoviendo ciertas diligencias; mas habiendo cambiado el personal del juzgado por ese tiempo, el demandado recusó al nuevo juez, pasando entonces los autos al tercero de la misma Capital.

Radicados ante esto, Robreau se presentó á continuar el pleito pendiente, al cual recayó el auto de fecha 8 de Marzo último, que se registra á fojas 60 vuelta del cuaderno principal. Dicho auto dice á la letra: "compúlsese, por el actuario, testimonio del documento de fojas 1, cuaderno primero de estos autos, del informe anterior y presente decreto, para que se forme y siga por cuerda separada el punto de la infraccion

de papel sellado, con cuyo testimonio dará cuenta; y terminado ese incidente se provea sobre lo que se pide en el anterior escrito." Con motivo de ese auto se formó el cuaderno por separado, que bajo el número cinco corre con los autos que se tienen á la vista. Esa pieza contiene las diligencias relativas á hacer efectiva la multa que el Juzgado tercero cree debe exigir á Robreau, por haber presentado una liquidación en papel del sello no correspondiente, sino infimo en clase y en valor. En vista de ese hecho, el juzgado sentenció con fundamento del artículo 55 de la ley de 14 de Febrero de 1856, que previene, que toda autoridad, juez ó funcionario público que no reclame la infracción de esa misma ley, será responsable del reintegro con el duplo de la cantidad en que la renta fuese defraudada, y autoriza á dichas personas para hacer efectivas las penas en que incurrieron los infractores; que D. Julio Robreau enterase dentro de tres días á la Tesorería de la administración de papel sellado, la cantidad de trescientos pesos valor de la multa, lo cual justificaria al cuarto, aperebido de ejecución á su costa si no cumplía con el mandamiento judicial. Despues de que Robreau intentó diversos recursos para inovar el decreto judicial y apremiado por el embargo, exhibió en calidad de depósito la suma de trescientos treinta y un pesos y se levantó el embargo. Siendo de notar que con fecha 29 del citado Marzo, se hizo ingresar á la caja de la Tesorería los trescientos pesos, importe de la multa decretada. No obstante todo eso, Robreau insistió en la aplicación que interpuso del auto de 8 de Marzo, y como le fuere negada, subieron al Tribunal Superior en 15 de Abril próximo anterior.

Pocos días antes, el 2 del mismo Abril, el Juzgado segundo de Distrito de México había dirigido al Juez tercero un oficio en que, á excitativa de Robreau, reclamándole el conocimiento de los autos sobre la multa. El Juzgado tercero contestó, que no podía

remitir el expediente relativo, primero, porque contenía un negocio concluido; y segundo, que aun cuando no lo estuviera y el punto de la multa se considerara como incidente del juicio ejecutivo principal, no puede separarse del conocimiento del mismo Juez tercero, y si se le considera distinto, entonces dicho juez tambien es competente, tanto por los artículos 55 y 71 de la citada ley de 14 de Febrero, como por la circular del Ministerio de Justicia de 11 de Abril de 1871. Sin embargo de esas razones, el Juez de Distrito no quedó convencido ni se conformó, resultando en suma el conflicto de jurisdicción entre ambas autoridades. El suscrito se ha detenido en hacer este extracto para deducir con facilidad las razones legales que justifican la pretension del Juez de Distrito. Desde la ley de 1837 que creo la facultad económico-coactiva hasta nuestros días, se ha comprendido cual es la inteligencia que debe darse á las facultades de esas autoridades, de esos empleados y demas funcionarios, que sin ser jueces del órden federal, están autorizados para hacer efectivas las multas fiscales. Esa autorización no se extiende sino á la autoridad, por decirlo así, del acto, asegurar la multa; ó mas claro, la cantidad en que ella deba consistir, ya embargando ó depositando esa cantidad, valores equivalentes si el resultado no está conforme en el derecho conque se le cobra, ó á recoger esa multa y remitirla á su destino si el interesado se conforma. Proceder de otra manera, conceder facultades meramente jurisdiccionales á los jueces del fuero comun, equivaldría á tanto como á darle jurisdicción en asuntos que son de estricto órden federal, con arreglo á las fracciones primera y tercera del artículo noventa y siete de la Constitución general. Pero aun hay mas: sería llegar á tropezar con el absurdo, de que el Ministerio público se presentara como parte ante el juzgado del fuero comun, y obligado á litigar allí; ya se deja comprender hasta donde se extendería el desorden de la jurisdicción de Hacienda.

En el sentido que se deja indicado para el uso de la facultad económico-coactiva, son muy explícitos los artículos 1, 2 y 13 de la ley de 20 de Enero de 1837; es conforme á ella y muy expreso el artículo 10 del decreto de 27 del mismo mes y año de 1837, reglamentario del anterior, y en el que se pone el modelo del oficio conque el empleado coactor ó exactor debe remitir las diligencias que formó, al juez de hacienda, para que las continúe.

Por último, el suscrito recordará como muy oportuna, porque en ellas se fijó por esa Corte Suprema el verdadero carácter de la facultad económico-coactiva, respecto de las autoridades que no son los jueces y tribunales de la federación. El fiscal recuerda y está en calidad de doctrina muy respectable la ejecutoria que obra en el juicio de amparo promovido por D. Manuel del Sel, en el que una administración de rentas, quizo llevar en virtud de la facultad económico-coactiva, sus actos hasta el punto de rematar bienes del Sr. Sel, contra cuyos actos fué amparado el promovente, en razón á que las facultades del exactor ó coactor, no pueden jamas confundirse y elevarse al rango de facultades jurisdiccionales sometidas por el artículo 97 de la Constitución á tribunales especiales, á saber, los de Distrito y Circuito, que han venido á reemplazar en nuestra actual organizacion de tribunales los extinguidos de hacienda.

Por lo expuesto, en opinion del suscrito justifica la demanda del Juez segundo de Distrito, y por lo mismo el fiscal concluye pidiendo á esa Sala se sirva decretar: Único: El Juez de Distrito de esta Capital es el competente para conocer del juicio promovido contra D. Julio Robreau, sobre la multa que se le ha impuesto por infraccion de la ley de papel sellado, y al que se refiere esta competencia. México Setiembre 24 de 1873.—*Altamirano.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 23 de 1873. Vista la competencia promovida por el Juzgado segundo de Distrito de esta Capital al tercero de lo civil de la misma, para conocer del incidente que ha ocurrido en los autos seguidos por D. Julio Robreau contra D. Santiago Richard, sobre pesos, cuyo incidente se refiere á la multa impuesta á Robreau por infraccion del artículo 16 de la ley de papel sellado, presentando en papel del sello tercero una escritura de obligacion con hipoteca, por el capital de tres mil pesos, con causa de reditos y plazo de tres años. Visto lo pedido ante esta primera Sala por el Sr. Fiscal, los informes de los jueces competidores con todo lo demas que de autos consta, se tuvo presente y ver convino:

Considerando primero: Que segun el artículo 97 fracion tercera de la Constitución general de la República, los negocios en que la federacion fuere parte, son del exclusivo resorte de los tribunales creados por el artículo 96 de la misma, á saber, los tribunales federales.

Segundo: Que los artículos 55 y 61 de la ley de 14 de Febrero de 1856, lo mismo que la circular de 11 de Abril de 1871 que cometen á las autoridades que imponen las multas por infraccion de dicha ley la facultad de hacerlas efectivas, deben entenderse en términos hábiles y como lo explica la ley reglamentaria de la facultad económico-coactiva de 20 de Enero de 1837, es decir hasta el punto de dejar asegurada como, agentes de la autoridad administrativa en favor del fisco, la multa casuada, pero dejando al Juez competente federal la cuestion en caso de contienda ó oposicion de los interesados.

Tercero: Que aun dando por supuesto que la ley de 14 de Febrero de 1856 se extendiera hasta los juicios del fuero comun que imponen las multas en cuestion, la facultad de conocer tambien del juicio en ca-

so de contrariedad de las partes; esa disposición debería entenderse derogada por el artículo 97 constitucional que se deja citado, según el principio universal de derecho, que la ley posterior deroga á la anterior, siendo la Constitución de fecha mas reciente, y sobre todo superior á toda ley secundaria, aun cuando esta fuera de fecha posterior que la ley de papel sellado; de conformidad con lo pedido por el Sr. Fiscal, se declara: El Juez segundo de Distrito de esta Capital es el competente para conocer del juicio promovido contra D. Julio Robreau por la multa que se le ha impuesto por infracción de la ley de 14 de Febrero de 1856, relativa al papel sellado.

Dévuélvase las actuaciones al Juzgado segundo de Distrito de México, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; remítase copia igual al tercero de lo civil para su conocimiento. Hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los Sres. Presidente y Ministros que formaron la primera Sala de la Suprema Corte de justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

Es copia. México, Noviembre 11 de 1873.
—*Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo, por el C. Santiago Calderon, en representacion de varios vecinos de Zimapam, contra las providencias dictadas por el Ayuntamiento de ese pueblo y puestas en ejecucion por el presidente municipal del mismo, para que por la fuerza armada y en uso de la facultad económico-coactiva, se hiciera efectivo el pago de rentas de unos terrenos que esa corporacion reputa ser bienes comunales.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

En este expediente que ha examinado el Promotor y es relativo al juicio de amparo interpuesto por el C. Santiago R. Calderon como apoderado de varios vecinos del mineral de Zimapam y la Encarnacion, contra el ciudadano presidente municipal de aquel Distrito, se hallan consignados varios hechos que deben sujetarse á prueba, puesto que ellos descansan en el derecho de propiedad.

Los quejosos aseguran que son poseedores de varios terrenos ubicados en el expresado mineral desde el año de 1717, y que en consecuencia, la corporacion municipal ningunos derechos tiene ni puede tener en dichas tierras. La corporacion municipal reconoce este origen; pero añade que por algunas causas fueron cedidas dichas tierras á la corporacion expresada.

Esta circunstancia obliga al suscrito á pedir á ese juzgado se sirva abrir este negocio á prueba por el término que señalan los artículos 10 y 11 de la ley de 20 de Enero de 1869, pues con lo que resulte de las pruebas, ya podrá extender su dictámen sobre lo principal. Pachuca, Febrero 25 de 1873.—*M. Sanchez.*—(Firmado.)